

---

Bertha Lerner de Sheinbaum\*

---

*La transmisión del*  
**MANDATO POLÍTICO**

---

**Escenario, imperativos y proceso**

Tanto el Estado como la sociedad mexicana constituirán, para el año de 1988, escenarios de una nueva transmisión del mandato político. Un nuevo presidente será elegido para 1988 en sustitución del presidente Miguel de la Madrid.

El relevo sexenal del presidente produce la transformación del estilo político y asegura ciertos ajustes en el sistema que tienden a aliviar tensiones.<sup>1</sup> Con el cambio presidencial un equipo nuevo es designado en la administración pública, compuesto por lo general de hombres que pasan del anonimato a la esfera pública, que escalan un peldaño en la peleada y difícil carrera política; es decir, en 1988, aparecerá también en escena una burocracia política de alto nivel que se encargará, como es propio de toda burocracia, de conservar e instrumentar el dominio político.

También el poder legislativo será renovado en 1988, renovación que

\* Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

<sup>1</sup> Son varios los estudios sobre la evolución política en México que demuestran cómo cada sexenio se producen cambios de estilo político y reajustes o rectificaciones tendientes a incrementar la estabilidad del sistema político mexicano. Véase por ejemplo: Arnaldo Córdova, *La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen*. México, Ediciones Era, 1963; Guillermo Palacios, *La idea oficial de la Revolución Mexicana*. México (Tesis de Grado.) El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1969; Bertha Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet, *El poder de los presidentes. Alcances y perspectivas (1910-1973)*. México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos A.C., 1976.

se produce formalmente por un proceso de elección popular que en realidad esconde un proceso de designación de índole más bien vertical. No es ningún fenómeno casual que la renovación del legislativo coincida con el cambio presidencial, ya que este cuerpo tiene como tarea básica en México conceder una fundamentación legal y hasta metafísica a los ordenamientos del Ejecutivo y hacer correcciones y pequeñas enmiendas a sus iniciativas legales.<sup>2</sup> Una comparsa del poder ejecutivo: tal es la naturaleza del poder legislativo. Tarea secundaria del Legislativo, sobre todo circunscrita a la diputación, es la de permitir la incorporación de tendencias ideológicas distintas en el sistema político, contribuyendo a su legitimación democrática.

Es previsible que, a nivel regional, el relevo político para 1988 sea menos espectacular pese a los cambios políticos o sustituciones de última hora, en el nivel de los gobernadores. El calendario electoral para el año de 1988, prevé legalmente tan sólo la elección de cuatro gobernadores en las entidades de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Morelos.<sup>3</sup>

Natural es que en el sistema político cambien pocos gobernadores en el último año, ya que el poder regional constituye un espacio de influencia creciente para el presidente a medida que transcurre el sexenio y, consecuentemente, en este nivel político se tejen y establecen alianzas relevantes para el momento de la sucesión presidencial.

No hay duda, por los niveles políticos que se van a renovar —presidente, alta burocracia, legislativo y un fragmento de poder estatal— que se avizora un cambio real en el poder político para 1988. No estamos en la víspera de un cambio meramente formal, pues el poder político tiene en estos niveles un considerable margen de decisión y constituye, por tanto, un poder real. Por ello, nos interesa desentrañar el tipo de proceso político que pronto habrá de verificarse, bajo el supuesto de que un cambio de hombres en el liderazgo político incide en otros procesos políticos. A la vez, resulta necesario precisar el escenario social en que se va a producir la transmisión del mandato político y finalmente, esclarecer cómo, a raíz de tal escenario social, se presentan ciertos imperativos y tónicas políticas para el

<sup>2</sup> Pablo González Casanova, en su libro *La democracia en México*, proporciona cifras que demuestran cómo los proyectos del Ejecutivo son aprobados por mayoría de votos en la Cámara de Diputados. Durante los gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho el 100 por ciento de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo fueron aprobados por unanimidad. A partir de 1943 son aprobados por unanimidad el 92 por ciento de los proyectos (1943), el 74 por ciento de los proyectos (1947), el 77 por ciento (1949), el 59 por ciento (1953), el 62 por ciento (1955), el 95 por ciento (1959), el 82 por ciento (1961).

<sup>3</sup> Para 1989 el calendario electoral prevé la elección de gobernadores en los estados de Baja California y Jalisco. Estos datos y la lista de los gobernadores que han actuado durante uno o más años en las administraciones de López Portillo y Miguel de la Madrid pueden consultarse en: *México social, 1985-1986. Indicadores seleccionados*, Estudios Sociales, BANAMEX, 1986.

próximo sexenio, los cuales, a su vez, se enfrentan a ciertos obstáculos e intereses que también se explicarán en este ensayo. Si la política es el arte de lo posible, no de lo deseable —como Max Weber con lucidez señaló<sup>4</sup>— consecuentemente la ciencia política debe permitir desentrañar —como es nuestro objetivo— qué es lo deseable y qué lo posible en la coyuntura política de México 1988.

No es casual que este ensayo de interpretación intente comprender, a unos meses del destape presidencial, los procesos, necesidades e imperativos que se van a desencadenar con la sucesión presidencial y que se planteen los problemas que hay para implementar ciertas políticas, ignorando otras temáticas, tales como quién será el próximo presidente y qué tipo de colaboradores tendrá; hoy temas comunes de conversación, tanto en los espacios donde se hace política como donde se habla de política. La ciencia política mexicana como la de otros países, no ha alcanzado el nivel de desarrollo suficiente como para profetizar quienes serán los políticos que ocupen los puestos de relevancia, ni como para prever políticas concretas. Y es que toda política esconde una dosis de secreto que es fuente de poder, y una dosis de arbitrio personal que se vería lesionado si se discuten a la luz pública las cuestiones esenciales. Es difícil que la ciencia política mexicana defina el nombre del candidato presidencial, proceso en que la voluntad y decisión del presidente desempeña un papel relevante. Además, es relativamente poco lo que se conoce en torno a otras cuestiones que parecen influir en la decisión presidencial, como el tipo de alianzas y acuerdos que existen en el seno de la burocracia política y entre la burocracia política y los grupos privados.

Comencemos por lo que el desarrollo y la naturaleza misma de la política nos permiten explicar: ¿Qué tipo de proceso político se va a producir para 1988? ¿Qué transición implica para el régimen político mexicano a partir de su estado actual y de su evolución? ¿Qué tipo de resortes se moverán a partir de tal proceso político? La tarea prioritaria de los politólogos debe ser despejar los procesos políticos que se desencadenan con los movimientos políticos, y no limitarse a explicar el impacto y la repercusión de lo económico, lo jurídico, lo sociológico en cada proceso.

### **Una transición lenta a un régimen semicompetitivo**

Para el Estado y la sociedad mexicana contemporánea, la transición del mandato político que se producirá para 1988, va a constituir un paso más

<sup>4</sup> Max Weber agrega empero que en este mundo de la política no se arriba jamás a lo posible sino se intenta repetidamente lo imposible. Max Weber, *El político y el científico*, México, La Red de Jonás, Premiá Editora, 1982.

en la lenta y pausada transición hacia un régimen semicompetitivo desde un régimen de partido dominante. Este proceso de apertura a una semi-competencia política que va a avanzar con la transmisión del mandato político, no es empero totalmente nuevo. Más bien es un proceso que se inicia con la Reforma Política de 1977,<sup>5</sup> que permite ocupar nuevos espacios políticos a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados y también legaliza la actividad política del Partido Comunista. La semicompetencia política también avanza con la Reforma Municipal de 1981, que permite a los partidos de oposición obtener un espacio en el nivel municipal, todo ello a lo largo de un proceso lento y zigzagueante, desarrollo que aún se estrella ante la exclusión de dichos partidos de la Cámara de Senadores, cuerpo que en varios países tiene un carácter aristocrático.

No es realista, en cambio, esperar para 1988 una transición abrupta y radical en el relevo político, por el carácter lento que asume la liberalización de un régimen autoritario y porque la semicompetencia es un proceso pausado. No viviremos en 1988, como ha sucedido en otros países de América Latina, una transición abrupta de un régimen político a otro. Testigos de la transición abrupta de una dictadura a una democracia limitada fueron Perú, Brasil y Argentina en 1980. En México, en 1988 no se puede producir, por ejemplo, un tránsito de la democracia limitada que ya existe, a una dictadura militar, que sería en estos momentos ir en contra de la historia latinoamericana; no hay condiciones para un tránsito tal porque no hay en el México actual una legitimidad del régimen civil, civilizatorio, que es condición básica para el tránsito a una dictadura militar, ni hay tampoco una insurrección popular o de izquierda que justifique la instauración de un régimen militar; finalmente, porque en México, los militares carecen del poder político necesario para constituir una fuerza que gobierne e imponga su hegemonía política en la sociedad.<sup>6</sup>

¿Qué trascendencia tiene anticipar que con el relevo político de 1988 se va a manifestar en México un paso más en la transición lenta hacia un régimen semicompetitivo desde un régimen de partido dominante? Hay que descartar que en tal coyuntura política se pueda presentar un tránsito

<sup>5</sup> Jesús Reyes Heróles pronunció un discurso como secretario de Gobernación en Chilpancingo, Guerrero, el 10. de abril de 1977, en que anunció la Reforma Política o la opción de la tolerancia política para México frente al endurecimiento y la violencia. José López Portillo tres años y medio después la justificaba diciendo: "En un mundo de desorden y retroceso México está logrando conciliar y complementar una exitosa reforma democrática". David Torres, "Reforma política y perseverancia del proteccionismo electoral". En *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLVI, Vol. XLVI, No. 2, abril-junio 1984, pp. 141-142.

<sup>6</sup> Sobre el tema, véase: Bertha Lerner, "El renacer de la democracia en América Latina". En *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Año XXXI, Nueva Época, Abril-Junio, 1985, No. 120. pp. 135-159.

de una democracia limitada a una democracia amplia. Esto debido a la inexistencia de un sistema real de partidos en México, es decir a la carencia de organizaciones políticas partidarias que presenten posiciones ideológicas atractivas y que posean una inserción profunda en la sociedad; al fortalecimiento de ciertas corporaciones y sindicatos privilegiados frente a los partidos políticos, como el sindicato que agrupa a los petroleros; y a la concepción de la política como actividad poco digna que aleja a México de una democracia amplia como aquellas que parecen florecer en los países capitalistas desarrollados en Europa Occidental.

No hay duda que se comprende desde una perspectiva más realista la naturaleza del régimen político que se consolida en México desde fechas recientes, si se visualiza que en este momento el país atraviesa por una transición de un régimen de partido dominante a un régimen semicompetitivo. Pero si esta transición se tiene en mente, también se desmistifica el peligro implícito en la próxima contienda electoral de 1988. Pese al fraude, descontento y movilización que se han manifestado contra el partido oficial, en no pocas elecciones locales y estatales, y que se pueden presentar nuevamente en la coyuntura de 1988, no parece existir en México el peligro de que el descontento electoral provoque una ruptura del régimen constitucional o, en dado caso, la desviación hacia una dictadura militar. En México no se han producido ni se perciben como cercanos una movilización general de masas, un conflicto relevante entre fuerzas militares y civiles, o un apoyo de Estados Unidos a una insurrección, condiciones para que la inquietud electoral se desborde y pueda llevar a una gran inestabilidad política y hasta a un cambio de régimen político.<sup>7</sup>

En México, como en todo régimen semicompetitivo, se produce la lucha entre varios partidos políticos que se lanzan a la contienda para obtener cargos distintos en el sistema político pero, también, imponer concepciones opuestas del mundo. No hay duda que en 1988 el partido oficial (PRI) simbolizará la continuidad del sistema, pese a apoyarse en la revolución de 1910 para conservar su credencial revolucionaria, aunque represente, de hecho, una posición de centro un tanto conservadora. La derecha tenderá a ser representada esencialmente por el Partido Acción Nacional y la izquierda por el Partido Mexicano Socialista. Detrás del régimen semicompetitivo que se está formando en México, hay una lucha entre partidos políticos que contienden por cargos pero a la vez por imponer concepciones diametralmente distintas de lo que puede y debe ser México, aunque aquí, como en otros países, los partidos están dispuestos

<sup>7</sup> Esta afirmación pone de relieve la necesidad de analizar la inquietud electoral en relación a otros fenómenos políticos, pues de lo contrario se corre el riesgo de exagerar o restar sus efectos.

a abandonar sus metas y concepciones ideológicas a cambio de concesiones políticas o cargos y concesiones de índole material y económica.<sup>8</sup>

La semicompetencia política que se inicia en México desde hace una década, revela que en la nación no hay un equilibrio entre partidos políticos, sino que impera la desigualdad. Las sucesiones presidenciales previas manifiestan tal desigualdad que, de repetirse en 1988 se expresaría en que el Partido Revolucionario Institucional seguirá siendo el partido dominante, es decir, lo más probable es que obtenga alrededor de tres cuartas partes de la votación y que el resto la compartan básicamente partidos con posiciones polares;<sup>9</sup> el PAN, representante de la derecha clerical y empresarial, y el Partido Mexicano Socialista, que representa sobre todo a la izquierda intelectual. Pero en una perspectiva histórica, el PAN ha ganado más apoyo de la base social, más votos, al tiempo que ha logrado encauzar, en sus filas, el descontento hacia el Gobierno.<sup>10</sup> Actualmente México tiende a alejarse de un régimen plural, no exclusivamente por la debilidad de los partidos de oposición, el fortalecimiento del corporativismo y el desprestigio de la política<sup>11</sup> sino también porque el Estado mexicano ha tendido a fortalecer, a través de iniciativas legales, recientemente decretadas, a los pequeños partidos de oposición, fomentando más bien la pulverización de los votos y no la competencia política. La competencia política partidista es contraria al autoritarismo mexicano.

Asimismo, por el tipo de transición política que lentamente se produce

<sup>8</sup> Max Weber ya hacía la distinción entre partidos cazadores de cargos y partidos portadores de una ideología o de una concepción del mundo. Después de Weber varios teóricos de la política como Daniel Bell han puesto de relieve el deterioro de la ideología.

<sup>9</sup> El partido oficial (PRI) tiende a obtener desde su fundación más de tres cuartas partes de la votación. Tan sólo en dos ocasiones obtuvo un poco menos; en 1952 cuando nominó a Ruiz Cortines alcanzó el 74.32 por ciento y en 1982 cuando nombró a De La Madrid logró el 70.33 por ciento. Con Lázaro Cárdenas (1934) obtuvo el 98.19 por ciento de los votos, con Avila Camacho (1940) el 93.90 por ciento. Con Miguel Alemán (1946) 77.91 por ciento, con Adolfo López Mateos (1958) 90.43 por ciento, con Díaz Ordaz (1964) el 88.82 por ciento, con Luis Echeverría (1980) 86.02 por ciento, con López Portillo el 92.27 por ciento. Datos obtenidos de *México social... op. cit.* p. 356.

<sup>10</sup> Varias elecciones presidenciales son testimonio de este hecho. En las elecciones de 1958, el PAN logró el 9.42 por ciento de los votos, en 1970 el 13.98 por ciento, en 1982 el 15.68 por ciento.

<sup>11</sup> Tal desprestigio de la política es empero un fenómeno poco estudiado empíricamente. Rafael Segovia en su encuesta sobre la socialización de los niños de primaria, realizada hace más de 15 años, señalaba que la política se veía como actividad poco digna. Enrique Alducín Albitia en un estudio sobre los valores de los mexicanos que tiene por base una encuesta nacional realizada en 1981 señala que a la pregunta sobre personas que inspiran un menor respeto se contesta en el siguiente orden: ladrón, maricón, capataz, cantinero, prestamista, gringo, gachupín, policía, pordiosero, político, millonario, abogado y cura. Ser político inspira, por tanto, poco respeto. Enrique Alducín Albitia, *Los valores de los mexicanos. México: entre la tradición y la modernidad*. México, Fondo Cultural Banamex, A.C., 1986, pp. 16-17.

en el país, puede comprenderse la orientación general de las fuerzas sociales en tal contienda: no es previsible que en México cristalice un pacto multclasista que tenga por objeto consolidar una transición radical o un cambio de régimen político. Tampoco se puede esperar la reconstrucción de un consenso social con base en ciertas banderas que logren adhesión de todo el conjunto social, como sucedió en varios países de América Latina, donde burguesía, obreros, campesinos y clase media, se unieron en la búsqueda unánime y desesperada de un retorno a la constitucionalidad, a un clima de derechos y al fin de la represión.<sup>12</sup>

En el México actual se puede prever, pese al consenso aparente que se presenta como clima preelectoral, una polarización de ciertas fuerzas sociales para el relevo político de 1988. De acuerdo con este diagnóstico, lo más probable es que los empresarios y las clases medias se polaricen en fracciones, y que sectores reducidos de dichas fuerzas apoyen al neopanismo, mientras la mayoría se alinea alrededor del partido oficial y apoya así la continuidad de su línea. También se puede pronosticar que el fraccionamiento político y el apoyo de los sectores populares a los partidos de oposición será menor; y es que el partido dominante conserva hilos y controles fundamentales para asegurar la lealtad y los votos de los obreros y los campesinos. No hay duda que las centrales obreras y campesinas que respaldan al partido oficial inclinan la balanza electoral a su favor.

Hasta ahora el relevo político que se producirá en México en 1988 se ha explicado teniendo presente la evolución política del país y el proceso de semicompetencia política que se ha iniciado y que es imposible detener, aunque existe el intento propositivo de hacerlo más lento.<sup>13</sup> Es sugerente y novedoso, desde un punto de vista metodológico, analizar las coyunturas electorales, revisando el pasado y apuntando hacia el porvenir, pese a que no deja de ser fascinante estudiar la contienda electoral en sí: descifrar los votos, identificar a los protagonistas de las elecciones e indagar sobre las formas y procedimientos que asume el proceso sufragista.

Como inciso siguiente interesa definir el escenario social en que se va a producir el relevo político de 1988, en tanto que de él surgen ciertos imperativos políticos condicionantes del mandato político.<sup>14</sup> La esfera de la política no

<sup>12</sup> Sobre el tema de las condiciones sociales en que se produce el retorno a las democracias políticas en América Latina, véase Norbert Lechner, *et. al.*, *Caminos de la democracia en América Latina*. España, Editorial Pablo Iglesias, 1984; Alain Rouquié *et. al.*, *Como renacen as democracias*. Brasil, Editora Brasiliense, 1985.

<sup>13</sup> El proceso de semicompetencia política se intenta detener no reconociendo los triunfos de la oposición y recurriendo al fraude electoral. A una variedad de prácticas recurre el partido oficial para presentarse casi siempre como el vencedor. Una descripción amena e interesante de tales prácticas puede verse en Juan Molinar, "Regreso a Chihuahua". En *Nexos*. Año X. Vol. 10, No. 11, marzo de 1987, pp. 21-32.

<sup>14</sup> No es particularidad del sexenio que se va a iniciar que el mandato político se determine en función del escenario social, es más bien una regla general. El populismo car-

es independiente de la sociedad; Estado y gestión política representan, sobre todo en momentos de cambio, ciertas banderas y necesidades generales que emanan de la sociedad.

### **Crisis y renovación como escenarios de la transmisión del poder político en 1988**

En el país se llevará a cabo el relevo político que, en un escenario social en crisis, tendrá como resultante la elección del presidente, la renovación de la burocracia gobernante, del cuerpo legislativo y de una parte pequeña del cuerpo regional; también la movilización de fuerzas sociales que cada sexenio se produce en un momento de elecciones.

Sin embargo, tal crisis no es patrimonio único de México. Todo el mundo capitalista atraviesa por una crisis comparable en su gravedad a la de 1929. Crisis de sobreproducción que enfrenta el capitalismo contemporáneo y, a la vez, debida a cambios en la división internacional del trabajo. Esta crisis lesiona de manera grave al mundo subdesarrollado, ya que de hecho, obliga a estos países a financiar las economías centrales a partir del pago de una deuda desorbitante.

Pero en México la crisis capitalista se agudiza debido a la confluencia de los procesos nacionales e internacionales. El país sufre una crisis agrícola que se origina tanto en el descenso de los precios agrícolas en el mercado internacional, como en las políticas erróneas en este rubro emprendidas por el Estado, sobre todo hacia los sectores mayoritarios de la población rural.<sup>15</sup> También la nación afronta una crisis energética, ocasionada por la baja en los precios internacionales del petróleo y en la ausencia de una política energética más diversificada.<sup>16</sup> Además, México es marco de una crisis que se presenta en terrenos no económicos, por ejemplo en el campo de la educación, pero que incide en la economía; y es que a medida en que transcurre el tiempo tiende a hacerse más agudo el choque entre la

denista surge, por ejemplo, como respuesta a las demandas insatisfechas que había dejado la Revolución Mexicana. El desarrollismo que enarbola Miguel Alemán es una respuesta ante las inquietudes que había legado el cardenismo. Un estudio donde se comprueba históricamente esta correlación entre escenario social y mandato político es el de Bertha Lerner y Susana Ralsky, *op. cit.*

<sup>15</sup> Una interesante descripción y análisis de la génesis y manifestaciones de la crisis agrícola que agobia al país puede consultarse en "Crisis económica y crisis del sector agropecuario" en *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLVI, Vol. XLVI, No. 2, abril-junio de 1984, pp. 313-349.

<sup>16</sup> Sobre los orígenes de la crisis del sector energético puede consultarse, Manuel Boltvinik, "Algunas reflexiones sobre la situación actual y perspectivas del sector energético en México". *Revista Mexicana de Sociología*, *op. cit.*, pp. 273-284.

política educativa del Estado, que llevó a éste a intentar legitimarse políticamente extendiendo los beneficios de la educación sobre una gran masa, y el mercado del empleo realmente estrecho que no proporciona espacios y oportunidades de movilidad social a los grupos con alta escolaridad.<sup>17</sup>

Pero la crisis, como una especie de fantasma sombrío, se hizo ya presente en las elecciones de 1983. Es más, tal crisis condicionó que Miguel de la Madrid anunciara como postulados básicos de su proyecto político y como ideas directrices de su gestión, la austeridad, la renovación moral y el retroceso de un populismo tardío<sup>18</sup> que caracterizó al Estado mexicano y constituyó la base de su estabilidad política. ¿Qué transformaciones experimenta la crisis seis años después de su comienzo? ¿Qué tipo de nuevos caracteres tiende a adoptar tal crisis que determinan que el contexto del relevo político de 1988 sea sustancialmente diferente al de 1983, que ya tenía en la crisis un contorno social predominante? En la historia no hay dos momentos iguales pese a que la crisis constituye tanto el clima como el escenario de las dos coyunturas políticas.

La coyuntura política de 1983 marcó el inicio de una crisis cuyo desenlace final todavía no se alcanzaba a percibir. En ese entonces la crisis era objetiva: México comenzaba a crecer más lentamente en el rubro económico; al tiempo, el Estado observaba un mayor deterioro como gestor de la economía y promotor de la política social. Para 1983, el Estado mexicano no ya había reducido el gasto público destinado a salud y alimentación, como otros países del continente latinoamericano, propiciando a largo plazo analfabetismo y desnutrición. De igual modo, Bolivia, Costa Rica y Uruguay estaban inmersos en esta dinámica de disminución del gasto público

<sup>17</sup> María de Ibarrola analiza en un excelente artículo la problemática de la educación en México, y refiere la influencia mutua que ejercen entre sí las características de la escolaridad y del empleo; considera que ambas expresan una interrelación concreta que se desprende del tipo de desarrollo económico seguido en el país, las clases sociales que intervienen en él y el discurso político e ideológico dominante. Cfr. María de Ibarrola, "El crecimiento de la escolaridad en México como expresión de los proyectos socioeducativos del Estado y la burguesía". *Revista Mexicana de Sociología*, *op. cit.*, pp. 173-243.

<sup>18</sup> El fin del Estado populista es una característica relevante del sistema político mexicano en la etapa contemporánea. En este contexto Sergio Zermeño explica que el Estado populista —fundamento del sistema en una época— no puede responder a las demandas populares, abandona el espacio de las representaciones, el sistema político, disminuye su presencia material y económica en el sistema. Sergio Zermeño, "Hacia el fin del populismo mexicano, (propuestas para discusión)". Mimeo preparado para el XII Congreso Internacional de LASA que tuvo lugar en Boston, Massachusetts, del 23 al 26 de octubre de 1986. El presidente Miguel De la Madrid tiende a definir al populismo como una política que cede ante lo inmediato y hace retroceder a la sociedad. Reyes Heróles como miembro del gabinete llegó a señalar en la misma tónica; el populismo no es una doctrina, ni una ideología, sino un síndrome. Un diagnóstico del discurso político del presidente De la Madrid y su ruptura con el populismo, se puede ver Bertha Lerner, 1983: "La ruptura frente al populismo, el compromiso con la austeridad y la renovación moral", en *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLV, Vol. XLV, No. 2, abril-junio de 1983. pp. 545-577.

en renglones de índole social. En la década de los ochenta comienza el deterioro del Estado benefactor y, al tiempo, se da una retracción global de la economía capitalista.<sup>19</sup>

Sin embargo, México se inscribe en este doble proceso. Como otros países del Tercer Mundo, en México la crisis de los ochenta no permanece estática hasta casi el final de la década, sino que evoluciona de tal modo que para 1988 ya se perfila como una crisis subjetiva, sentida por la mayoría de la población. Tras esta transición de crisis objetiva a subjetiva, se produce como hecho básico un deterioro dramático en los niveles de bienestar para una mayoría de la población del país, que no era tan nítido y doloroso en 1983; también sobreviene, como consecuencia de lo anterior una paralización de la actividad económica interna.

Seleccionemos unos cuantos satisfactores básicos para demostrar cómo, a raíz de la crisis, se ha afectado la calidad de vida de los mexicanos y cómo tiende a disminuir su nivel de bienestar. No sólo se vuelve prohibitivo el consumo de productos necesarios, como la carne, que siempre ha sido consumo de privilegiados, sino que se registra un aumento de precios en productos básicos como las tortillas, que constituye la pieza clave de la tradición alimenticia. Más aún, en abril de 1986, se intentó liberar a la tortilla del subsidio estatal, lo que hubiera significado un aumento de casi el 200 por ciento sobre su precio anterior; pero debido a intervención del Congreso del Trabajo, tal subsidio se racionalizó sin eliminarse.<sup>20</sup> Las tortillas y el pan son hoy los únicos alimentos objeto de subsidio estatal. De igual modo, el transporte urbano, servicio público esencial, es objeto de una alza de precios considerable y de un cambio de sistema que hace que llegar al trabajo se vuelva una actividad de costo altísimo para un obrero con sueldo paupérrimo.<sup>21</sup> En tanto, la vivienda se convierte en un bien

<sup>19</sup> Para 1979 México destinaba al gasto público en educación y salud, de acuerdo con las cifras de la CEPAL, 22.6 por ciento del gasto gubernamental; en 1983 el porcentaje disminuyó a 12.2 por ciento. Los gastos de educación resultaron los más afectados, pues cayeron en casi ocho puntos porcentuales, en tanto los presupuestos para los programas de salud lo hicieron en casi tres puntos porcentuales del gasto público total. *Cfr.* Lourdes Galaz, "Pobreza extrema en Latinoamérica a fines del siglo, prevé la CEPAL". *La Jornada*, 21 de abril de 1986.

<sup>20</sup> El sistema de subsidio a la tortilla a raíz de las presiones del Congreso del Trabajo cambió: antes las tortillas las distribuía la CONASUPO, ahora en las tiendas del sector público se cambian bonos, pero lo cierto es que en los últimos cinco años el precio del producto ha subido nueve veces contra tres y medio que lo ha hecho el salario mínimo. Sobre el tema, *Cfr.* Rosa Albina Garavito, "Adiós a los campesinos". *La Jornada*, 18 de abril de 1986; Teresa Gurza, "En los últimos 5 años, la tortilla aumentó su valor 9 veces: analista". *La Jornada*, 10 de abril de 1986; Cristina Martín, "En tortilla, cambio de sistema no eliminación de apoyo: Secofi". *La Jornada*, No. 569.

<sup>21</sup> En 1986 se establece un cambio de sistema en el transporte urbano del Distrito Federal. Se crea un boleto multimodal que sirve para utilizar indistintamente los diversos transportes que opera el Departamento del Distrito Federal, por quince días, cuantas ve-

progresivamente inalcanzable para el conjunto de la población. Debido al encarecimiento de los productos, el mercado interno se contrae y el ritmo de la producción desciende, de tal modo que para el primer semestre de 1986 se calcula un deterioro del 4.5 por ciento de la producción industrial respecto al año anterior.<sup>22</sup> No hay duda que México atraviesa por una crisis que empeora las condiciones de vida, de por sí difíciles de la mayoría de la población, crisis que ocasiona una parálisis en la actividad económica nacional.

Simultánea a la económica, una crisis política comienza a ensombrecer el panorama de México en los últimos años de la década de los ochenta, que va a estar presente en el relevo de 1988, siendo que en 1983 la crisis se circunscribía a un plano estructural y económico. México no es un país que viva en este momento una crisis total de hegemonía, o un resquebrajamiento absoluto de los resortes políticos en los que se apoya el sistema político, pues de ser así estaríamos ante un colapso evidente. La expresión fundamental del inicio de esta crisis política, que no implica la debacle política total, es un cierto deterioro en la legitimidad mínima y la lealtad que las masas y diversos grupos de la sociedad civil deben tener hacia la conducción política. Se ha perdido la confianza y la fe en el Estado o en la conducción política, que existía hace tres o cuatro décadas; no se concibe al Estado como benefactor, ni como instancia capaz de administrar al país.<sup>23</sup> El temor a un estallido social a causa de la desigualdad económica imperante, se comienza a manifestar en varios núcleos de la sociedad;<sup>24</sup>

ces sea necesario y con un costo de 700 pesos. El nuevo sistema permitió al gobierno reducir en un 50 por ciento el subsidio al transporte urbano, encareció el transporte o viaje urbano, pese a que permite un ahorro mínimo de 20 por ciento en gastos de transporte cuando se requieran más de 2.5 viajes diarios. *Cfr. Excelsior*, 12 de julio de 1986.

<sup>22</sup> Tal crisis que en México se expresa en inflación, paralización de la actividad productiva, deterioro de los niveles de bienestar también es de magnitud relevante para todo el continente latinoamericano. La CEPAL apuntaba en un documento preparatorio del vigésimo primer periodo de sesiones: 1. La crisis económica de la región es la peor en medio siglo y frente a ella las medidas de corto plazo son insuficientes. 2. Si no se operan cambios significativos esta será una década de pérdida: en 1990 varios países latinoamericanos tendrán niveles de ingreso per cápita menores a los registrados en 1980. 3. Se estima que para el año 2 000 habrá 170 millones de individuos que vivirán en la pobreza: esto es, una tercera parte de la población. *Cfr. Ugo Pipitone*, "La CEPAL y las buenas intenciones". En *La Jornada*, 22 de abril de 1986.

<sup>23</sup> No hay duda que el Estado mexicano era una instancia que generaba confianza en varios grupos de la población: la iniciativa privada tendía a invertir y conservar su dinero en el territorio nacional. Los sectores populares manifestaban confianza en la gestión política o en el presidente en turno pues en momento de candente conflicto tendían a negociar con el presidente.

<sup>24</sup> En dos encuestas realizadas por el Instituto Mexicano de Opinión Pública A.C., en el Distrito Federal, con una seguridad de la muestra de 95 por ciento respectivamente, el 54 por ciento de los entrevistados señaló que tenía temor de que se produjera en México un estallido social; el 88 por ciento de los entrevistados aceptó que en México hay perso-

temor que revela una cierta desconfianza hacia el Estado como la instancia encargada de aplicar aquellas políticas populares que alivien la situación crítica del país, y como instancia capaz de evitar un estallido social.

Esta crisis política en germen, o comienzo de crisis política, que tiene como uno de sus detonantes una cierta erosión de legitimidad del Estado mexicano, también se debe a cierto anquilosamiento de las piezas esenciales del aparato estatal mexicano, que van a estar presentes en el relevo político de 1988, y que constituyen un motivo de inconformidad hacia el gobierno, que tiende a manifestarse en el terreno electoral. El Estado mexicano en calidad de administrador de las empresas públicas o en la de patrón, ha mostrado cierta ineficacia: muchas empresas públicas funcionan con pérdidas, no sólo por la política de subsidio que él instrumenta propositivamente, sino también por una administración deficiente.<sup>25</sup> Asimismo, la burocracia y la policía, dos piezas fundamentales del sistema político mexicano —como de cualquier otro— son espacios conflictivos donde la corrupción y la desorganización predominan; a su vez, son responsables parciales de la ilegitimidad del Estado mexicano y de males tan graves como el endeudamiento del país.<sup>26</sup> El partido oficial, elemento básico del aparato estatal, muestra señales de malestar, por lo que debe recurrir al fraude electoral para imponer a sus candidatos y no tiene amplia capacidad de movilización y de representación, pese a que en 1987 se intentó generar en el partido un mayor dinamismo con el nombramiento de un cuadro directivo integrado por viejos políticos, más diestros en la conciliación social y en la movilización masiva encaminada a contraer nuevos compromisos políticos.

La crisis política no tiene un origen meramente interno; inciden en ella detonantes exteriores. El Estado mexicano tiende a mostrar, desde 1980, una posición demasiado conciliadora o una relación bastante sumisa hacia Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, instancias que

nas que gozan de ciertos privilegios. Adip Sabag, "Miniencuestas". *Excelsior*, 15 de mayo de 1986 y 2 de abril de 1986.

<sup>25</sup> Dirigentes de las cúpulas empresariales han dado a conocer los siguientes datos, que había que comprobar y precisar como testimonio de los problemas del sector público como administrador: El déficit del sector público en 1986 fue de 4 billones —16 mil millones de pesos— el doble de 1985. De las mil 144 paraestatales existentes, sólo 27 tienen un férreo control del gobierno. El déficit de la Comisión Federal de Electricidad es de 750 mil millones de pesos, le sigue Conasupo con 600 mil, luego Fertimex, Ferronales, Sicartsa y Aeroméxico. *La Jornada*, 18 de abril de 1986.

<sup>26</sup> La economista brasileña María da Concelso Tavares sostuvo que en México el 70 por ciento de la deuda externa es inexplicable en términos de financiación de cualquier proyecto y que en Argentina el 100 por ciento de la deuda externa no se justifica macroeconómicamente porque tuvo inicio en un periodo en que el país tenía un superávit final en la balanza de pagos y toda entrada de capitales al país fue meramente especulativa. *La Jornada*, 29 de abril de 1986.

intentan ejercer una nueva hegemonía y hasta una especie de poder vi-reinal en el continente, puesto que además de fomentar la explotación de los países pobres y el intercambio desigual, lesionan la soberanía nacional de los pueblos latinoamericanos.<sup>27</sup> Por su posición poco progresista en el frente externo que revela su escasa imaginación, el Estado mexicano tiende a perder legitimidad entre los sectores progresistas locales y aun latinoamericanos, sobre todo en un momento crucial en que varios países regresan a la vía constitucional y democrática y recurren, con base en un mayor consenso interno, a una negociación más agresiva tanto hacia Estados Unidos como hacia los organismos internacionales: Nicaragua se enfrenta con Estados Unidos o los *contras*, sus representantes políticos e ideológicos en el campo de batalla; Perú impone un límite al pago de la deuda —no puede rebasar el 10 por ciento del monto de las prestaciones peruanas—; Argentina y Brasil, trazan, aunque con resultados radicalmente distintos, planes internos para contrarrestar la crisis económica y resistir el pago de la deuda.

El escenario social en que se va a producir el relevo político de 1988 no se agota ni circunscribe a la crisis. Existen síntomas de que el país se inscribe dentro de un proceso de incipiente renovación, proceso que acompaña a la crisis y es, además, consecuencia de la misma. Si bien es cierto que tal proceso de renovación no tiene el peso, influencia y relevancia de la crisis, sí alcanza expresiones variadas y multifacéticas en la realidad social mexicana.

De la periferia al centro político del país comienzan a surgir ciertos indicadores políticos de una renovación. Aparecen políticos, a nivel de gobernadores, que se lanzan a hacer una política más agresiva y democrática tomando en cuenta a la población local; se registra un despertar político en las localidades, se rechazan candidatos impuestos, se lucha por participar en las decisiones, despertar que aceleró la Reforma Municipal de 1981, que otorga al municipio mayor autonomía político-económica.<sup>28</sup> Dada la renovación que se observa a nivel municipal, no es extraño que 1988 sea una de las primeras coyunturas políticas en que se menciona que el nuevo presidente debe salir del grupo de los gobernadores y no del gabinete, como es ya costumbre en nuestro sistema político.

En el México actual, como síntoma de la renovación, comienzan a emerger movimientos juveniles, en respuesta a los intentos de reformar la educación,<sup>29</sup> como sucede en países como Francia, España y China. Lo

<sup>27</sup> Alan García, presidente de Perú, tenía razón cuando estableció el dilema en términos claros: "O los países son soberanos o no lo son".

<sup>28</sup> Jorge Sayegh Helu *et al.* *La Reforma Municipal en la Constitución*, México, Editorial Porrúa, 1985.

<sup>29</sup> En México surge un movimiento estudiantil a raíz de las reformas que se intentan implantar en la Universidad Nacional Autónoma de México.

novedoso no es la protesta estudiantil en sí misma o que ésta surja de contextos distintos como respuesta contra las reformas en la educación; la historia es rica y fértil en este tipo de luchas que enarbolan demandas en favor de las masas. Lo inédito es la concertación, el diálogo abierto, la negociación que en tales movimientos se mostró; y el que no se haya recurrido a la represión, desenlace común en movimientos de este corte. México constituye un país con población joven; de ahí que no sea cuestión irrelevante la inquietud de la juventud por una renovación educativa que a la larga incida en la política y lo social.

En una dimensión distinta de la realidad social mexicana, existe otro indicador del proceso de renovación: el movimiento democrático y democratizante que surge en 1987 al interior del partido oficial, que no se puede descalificar por los intereses particulares de sus participantes o porque sus líderes busquen un reacomodo burocrático o posiciones de fuerza.<sup>30</sup> Este movimiento democrático apunta transformaciones políticas relevantes, como un nuevo espacio para la política frente a la administración, un mayor *status* para el partido oficial frente al gobierno, una negociación más agresiva, imaginativa y dinámica del Estado mexicano ante los Estados Unidos que impida a la nación ser rebajada a la categoría de “república bananera”, y una mayor democratización y representación de la base social en los cargos políticos. Por la relevancia de los preceptos que la Corriente Democrática postula y porque a través de éstos se presenta una posibilidad de renovación para el partido oficial, no se puede marginar este movimiento de un proceso de renovación que constituye un escenario secundario del próximo relevo del mando político, pese a que el autoritarismo vigente en el partido oficial y fracciones internas de éste se oponen a la asimilación de la Corriente Democrática.

Finalmente, en el ámbito empresarial se advierten síntomas de otra renovación que no chocan con las iniciativas de cambio que se presentan en el partido oficial, en la esfera estudiantil y en el nivel político regional, iniciativas que también se enfrentan a presiones y conflictos, como el autoritarismo del partido, y el radicalismo estudiantil y el malestar político en ciertas entidades. Comienza a adquirir relevancia la iniciativa de algunos sectores empresariales de exportar a partir del estallido de la crisis y como salida frente a la misma, aunque otros estratos empresariales se excluyan de la competencia económica internacional. Pero si la expansión económica hacia afuera comienza a ser una realidad en este sexenio, pese a que ya era proyecto del gobierno de Luis Echeverría,<sup>31</sup> tal proceso enfrenta

<sup>30</sup> Porfirio Muñoz Ledo, uno de los líderes de la Corriente Democrática, fue secretario de Educación Pública, y presidente del Partido Revolucionario Institucional.

<sup>31</sup> Bertha Lerner y Susana Ralsky, *op. cit.*, pp. 437 ss.

problemas no menores: burocratización en políticas gubernamentales que tienden a entorpecer la exportación, multiplicación de incentivos económicos para el rentista frente al empresario productivo —aunque este último es quien puede instrumentar la exportación—, encarecimiento de materias primas y mano de obra, con lo que se hace más difícil la exportación. En el marco de estos problemas y de otros se produce la exportación.

Como tema siguiente interesa responder esta cuestión: ¿qué imperativos surgen para el nuevo mandato político que asumirá el poder en 1988, en el escenario sociopolítico descrito en páginas anteriores? También es necesario bosquejar los problemas que se pueden presentar en la puesta en práctica de tales imperativos. No es fácil para los voceros y directivos del Estado mexicano llevar a cabo ciertas políticas, aun cuando estén convencidos de ellas; esto debido a la intervención obstaculizadora de los grupos de presión. La política en México no se hace sólo con base en criterios de necesidad y previsión.

### **Nueva modernización y nueva concertación social, imperativos políticos para 1988**

No hay duda de que quienes ejerzan la dirección del Estado mexicano a partir de 1988, deberán asumir tres exigencias básicas en función del escenario social prevaleciente en el país. En primer lugar, contrarrestar la crisis por la que atraviesa la nación: objetiva y subjetiva, económica y política; en segundo, fortalecer la semicompetencia política encaminada a ser un proceso saludable en tanto que rompe muchos años de monopolio político del partido oficial; y en tercer lugar canalizar los movimientos de renovación surgidos en frentes políticos y sociales diversos de la sociedad mexicana.

Con base en una nueva estrategia de modernización, el mandato político que va a llegar al poder en 1988 deberá, también, hacer uso de una nueva concertación social, más agresiva e imaginativa, que permita aprovechar los recursos exiguos de índole económica que existan en la sociedad, para reorientarlos a la modernización y conciliar nuevos movimientos sociales. Pese a que la modernización y la nueva concertación social son políticas que se ponen en marcha de manera simultánea en la realidad social, la concertación como vía para conciliar intereses, aliviar tensiones y emprender la modernización, analizaremos primero los supuestos, las dificultades y los frentes donde se debe instrumentar la modernización, para posteriormente explicar lo referente a la concertación.

El Estado mexicano o la parte visible de éste que se compone de varias piezas —burocracia, policía, etc.— tiene que pasar primero por un proce-

so de modernización para desarrollar una nueva capacidad de gestión política, indispensable en un momento en que hay que conciliar, debido a la misma crisis, intereses y grupos radicalmente opuestos. Cierta tradicionalismo o vestigios de patrimonialismo y personalismo, prevalecen en el aparato estatal que, sin eliminarse totalmente, deben integrarse a la modernización. También, como parte de ésta, debe llevarse a cabo el desaholvo o ramificación del poder ejecutivo, de tal modo que deje de ser la telaraña donde todo se genera y se bloquea a partir de la voluntad presidencial.<sup>32</sup>

No sólo el mandato político de 1988 debe comenzar por modernizar el Estado, también debe introducir la modernización en el sistema de mediación política, sobre todo en sus órganos básicos tales como el sistema partidario en su conjunto y los partidos políticos en específico. El trayecto hacia la modernización exige que tanto la izquierda, la derecha y demás opciones ideológicas tengan una representación política partidista pero, asimismo, que en un avance hacia lo moderno, tales tendencias ocupen espacios progresivos en el sistema político. Tanto el poder regional como las instancias del poder central —por ejemplo, el senado— deben convertirse en espacios del sistema donde prevalezca un mayor pluralismo político e ideológico. La modernización del país en lo político, también depende de que el gobierno permita la autonomía del partido oficial, pues la simbiosis o unión entre ambas instancias ha impedido que el partido oficial se transforme, gane un espacio mayor en la sociedad y se fortalezca como organización clave de masas, papel que antes desempeñó con gran eficacia.

El mandato político que asumirá el poder a finales de 1988, debe procurar la modernización de la sociedad y no sólo circunscribirse a la modernización del Estado. Sin embargo, la primera debe hacerse con finalidades distintas a los experimentos en este rubro habidos en el pasado. La modernización que arranque de 1988 tiene que fomentar el crecimiento económico, la independencia nacional y una mayor equidad social, para así superar las tentativas de modernización anteriores que aceleraron la dependencia, la desigualdad y el atraso económico.<sup>33</sup> Dentro de esta perspectiva de modernización, es esencial que el nuevo mandato político fomente el desarrollo de las empresas económicas para que éstas puedan

<sup>32</sup> Cfr. Rolando Cordera, “La economía política del tunel”. En *Nexos*, noviembre de 1986.

<sup>33</sup> Rolando Cordera señala que a la fecha llevamos tres experimentos de modernización: la modernización con populismo, en que sin demasiado ímpetu y consistencia, el populismo termina por teñir y decolorar a la modernización. El segundo es el de la modernización por extensión que tiene como detonante la renta petrolera, la cual, al reducirse, da al traste con las ilusiones de avanzar “por el margen” y deja a lo moderno convertido en simple *gadget*, o en cuenta bancaria en el exterior. Por último, la modernización por la vía de la expiación y la depuración que hoy nos tiene en un valle de lágrimas, *Idem*.

competir con el exterior; es decir, es necesario dar nuevos estímulos a la exportación, a fin de que transforme la tecnología, las condiciones de trabajo y comercialización, y la distribución de productos. Un México moderno requiere de una estructura económica moderna y también de empresas modernas.

La modernización de la sociedad mexicana precisa extenderse al terreno educativo y no limitarse al ámbito económico-político. Es necesario que los centros de cultura, las universidades y las escuelas básicas e intermedias estén a tono con las exigencias de la nueva época, de tal modo que en estas instituciones se difunda a la vez un conocimiento técnico de los requerimientos del país y se despierte, además, una conciencia nacional de los problemas locales y de la inserción de México en el contexto mundial. No parece compatible con la época que vivimos, el nacionalismo difundido en los libros de texto, así como la idealización política del país que obstaculiza una socialización adecuada. Todo el aparato de socialización formal e informal de México —integrado por los medios de comunicación y otras instancias que difunden símbolos—, debe ser revisado bajo los criterios de la modernización. No requiere el Estado y la sociedad mexicana, por efecto de la modernización, la multiplicación de especialistas que de todo sepan un poco. La meta debe ser producir profesionistas técnicamente preparados pero con una conciencia de la situación del país y del mundo en que vivimos.<sup>34</sup>

En síntesis, la modernización que el nuevo mandato político implemente en 1988, debe abarcar todos los frentes: la economía, la cultura, la política. Es necesario revisar los criterios de la intervención del Estado en estos campos, su manera de actuar en sociedad, de planear e incidir en ciertos cambios y transformaciones. Esta política de modernización no es un proceso fácil, en razón de los múltiples frentes en que se debe producir y por las circunstancias sociales en que se inscribe y los enemigos que tendrá que enfrentar.

Ante la crisis económica prevaleciente en el país, agudizada entre 1983 y 1988, la modernización significa un reto y un desafío. ¿Cómo emprenderla en un momento en que los recursos económicos escasean y precisamente cuando el ingreso en el mundo moderno exige la importación de tecnologías, de infraestructura demasiado costosa? ¿Cómo echar a andar la modernización en un momento de parálisis económica, cuando el mercado interno es estrecho y la exportación no ha dado resultados positivos?

<sup>34</sup> Antonio Gramsci hace una distinción interesante entre el especialista y el intelectual. El especialista carece de una concepción humanista histórica. Al intelectual lo distingue tal concepción. Antonio Gramsci, *Los intelectuales y la organización de la cultura*, México, Juan Pablos Editor, 1975.

La modernización que el mandato político de 1988 debe emprender, tiene enemigos y oponentes políticos en los diversos planos: burocracias aferradas al tradicionalismo y patrimonialismo se oponen a burocracias más profesionalizadas y técnicas; políticos tradicionales que manejan la elocuencia motora exterior se contraponen a otros que poseen un saber técnico y son portadores de una concepción histórica. Desde el marco de la economía, las empresas tradicionales son naturales oponentes del proceso de modernización, empresas que el proteccionismo estatal amparó por mucho tiempo. Masas que se aferran al derecho a la educación independientemente de la calidad de tal servicio, impugnan la modernización educativa. En síntesis, la marcha hacia la modernización se avizora como un proceso lento y difícil con escasos éxitos económicos a corto plazo. Esta lentitud y bancarrota económica obligará al Estado mexicano, como a otros latinoamericanos, a avanzar mientras tanto en la concertación y la democracia.

Como la modernización, la nueva concertación social que el Estado mexicano debe implementar a partir de 1988 no se vislumbra como un proceso fácil, no sólo por la escasez de recursos económicos que son siempre una manera de conciliar sino también por los intereses creados en terrenos distintos de la sociedad.<sup>35</sup> ¿En qué planos se requiere la nueva concertación y qué frenos impiden realizarla?

Una negociación y una concertación más imaginativa y agresiva se requiere aplicar en unión con la iniciativa privada, una vez que han quedado relativamente limadas las asperezas y desconfianzas surgidas entre este sector y el Estado a raíz de la nacionalización de la banca, lo que no impide que tal iniciativa privada, en los últimos años, haya modificado su intervención en la sociedad. Esta iniciativa privada se ha politizado, siendo que en el pasado parecía estar de acuerdo en dejar la política en manos del grupo gobernante y conservar para sí la dominación económica. Hacia los partidos se vuelca ahora tal iniciativa privada, apoyando el neopopulismo, por lo que proporciona señales de estar interesada en participar en política directamente. Además, presiona al Estado para que dé marcha atrás en su papel de rector económico. Su lema es: toda la sociedad que sea posible y sólo el Estado que sea necesario.<sup>36</sup> Ante esta estrategia parece muy difícil que el Estado mexicano puede ceder, pues la experiencia de América Latina fue positiva cuando el Estado intervino en la sociedad, mediatizando los conflictos sociales.

<sup>35</sup> El populismo constituyó en México y en América Latina una manera no sólo de organizar demagógicamente a los sectores populares y crear una base de apoyo al gobierno; fue una política popular que implicaba conceder a los sectores populares reivindicaciones económicas.

<sup>36</sup> Sobre esta posición del sector empresarial, véase Lorenzo Servitje, *Reflexiones y comentarios de un dirigente de empresa (1969-1983)*, México, Editorial LIMUSA, 1984, p. 28.

En la nueva gestión política se requiere aplicar una nueva concertación social hacia los trabajadores, quienes parecen haber sufrido más las crisis sin poder beneficiarse de la competencia política, como lo hicieron pequeñas fracciones de intelectuales. Los obreros eventuales no sindicalizados son los que han resultado más afectados por la crisis. Por otra parte, un nuevo sindicalismo independiente ha nacido con una posición más combativa hacia el Estado, mientras que el corporativismo oficial se ha deteriorado por la incapacidad de las centrales de luchar en tiempos de crisis por la defensa de los salarios y de las condiciones de trabajo de sus agremiados. La situación que anuncia el relevo político de 1988 parece insostenible. Revisiones salariales más constantes comienzan a ser exigidas por los obreros, para contrarrestar en un mínimo grado el alza de precios. No está lejos el momento en que se produzca una renovación en el liderazgo obrero, proceso que va a remover cuestiones de fondo y a poner en tela de juicio elementos básicos como las bases del pacto entre el Estado y los obreros, que paulatinamente han provocado insatisfacción en una de las partes, la más débil: los obreros.

En el terreno del propio Estado, de los obreros y los empleados públicos, y no sólo de la sociedad, se ha generado una situación que exige ya una negociación más complicada y difícil; y es que al amparo del Estado se ha creado una aristocracia que tiene mejores condiciones de vida que el resto de la clase trabajadora, aristocracia que ha ocasionado, a cambio de la lealtad política, enormes males para el país; parasitismo, ineficacia que lesionan al propio Estado.<sup>37</sup> Parece necesario movilizar este sector que tiene tanto poder y tantas canonjías con una inteligente e imaginativa concertación; esto es indispensable para avanzar en la modernización del Estado.

De igual manera hacia los campesinos se requiere realizar un cambio en la concertación puesto que también este sector se ha visto perjudicado con la crisis y ya comienza a manifestar, aunque a nivel aislado y local, más agresividad política. Por ejemplo, en marchas de protesta que salen de las entidades regionales y llegan al centro del país, o en invasiones de grupos campesinos a ciertas sedes diplomáticas. El deterioro que la central campesina oficial ha tenido como canal de mediación entre campesinos y Estado, advierte la necesidad de buscar una concertación que se produzca por otros medios y bajo otros criterios. Es esencial para la gestión política de 1988, fortalecer la alianza Estado —sectores populares, ya que en ésta se sigue fincando en gran medida la estabilidad del sistema político.

<sup>37</sup> Sobre el tema véase Bertha Lerner, "México moderno: espacio de una protesta pasiva por parte de la burocracia política", *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLVII, No. 4, octubre-diciembre de 1985. pp. 115-181.

Hacia los sectores que no se definen estrictamente por su pertenencia a la esfera económica, es necesario promover una nueva concertación, como es el caso de los estudiantes, dado el imperativo de crear en el país una modernización educativa que sustente la económica. Particularmente difícil es la negociación con los representantes de las fuerzas estudiantiles no sólo por su agresividad y el impulso propio de la juventud, sino porque es en la arena educativa donde se puede manifestar la lucha social y la protesta indirecta ante la crisis, donde cristalizan diversas ideologías y contrastes, pues, al lado de grupos ultraconservadores, coexisten otros que piensan que el movimiento estudiantil puede ser el detonante para la transformación de la sociedad. También el hecho objetivo de que la educación haya cesado de ser el medio de movilidad social que era en el pasado, hace más problemática la concertación en este terreno.

Para disminuir otros grandes males del país, que involucran directamente a varios sectores, se requiere también una concertación más agresiva y distinta. No es la concertación una negociación que se imparta únicamente entre el Estado y cada una de las clases o sectores sociales por separado. Para hacer plausible una cierta descentralización del país, un freno a la contaminación, se requiere negociar, conciliar. Pero en la sociedad mexicana contemporánea, se han desarrollado grupos múltiples que obstaculizarían cualquier cambio hacia la modernización que resulta en estos momentos, además, demasiado costoso. Con escasos recursos económicos y abriendo nuevas vetas políticas resulta necesario implementar pequeños y graduales cambios para contrarrestar los grandes males.

Finalmente no puede ser excluido del proceso de concertación el frente externo. De una nueva, imaginativa y agresiva concertación de la deuda pública mexicana con Estados Unidos parece depender nuestra modernización económica, y la concertación social. Ciertas fuerzas juveniles ya han esbozado su propósito de presionar a la nueva gestión política para que ponga un límite al pago de la deuda, para no sacrificar el desarrollo económico e intentar detener el empeoramiento en los niveles de bienestar, ya de por sí grave. No se visualiza, empero, como un proceso fácil la concertación en el frente externo. Aun los países capitalistas parecen preocupados por beneficiar sus intereses a costa del estancamiento de las naciones atrasadas, como hace poco se reveló en la Reunión de los Grandes en Venecia. Tampoco Ronald Reagan parece dispuesto a ceder mucho en estas cuestiones ni en otras, pese a la existencia de sectores estadounidenses preocupados por que no se diluya totalmente —tomando en cuenta la vecindad y el potencial económico del país— la relación especial entablada con México.

Pero si en torno a la combinación de una doble fórmula de modernización y concertación debe girar la gestión política de 1988, esta doble fór-

mula parece requerir de un equipo de políticos hábiles en la conciliación, realistas conocedores de la infraestructura económica del país y de sus posibilidades. A la vez, es necesario que se produzca la consolidación de las mayorías políticas preocupadas por la democratización y la modernización del país que puedan ser un elemento de apoyo de primera importancia para los cuadros políticos.<sup>38</sup> Se requiere, entonces, de un cúmulo de fuerzas sociales para enfrentar el desafío político que va a representar 1988, donde la necesidad de la modernización y el cambio parece irreversible y de mayor y más ágil concertación social. En este proceso, tanto el avance del país como la paz social, parecen estar en juego.

<sup>38</sup> Cf. Sobre este tema, Manuel Garreton, "Transición y consolidación democráticas en América Latina. Una perspectiva general". Ponencia presentada en la reunión de Boston, U.S.A. octubre, 1986, p. 11.